

Id Cendoj: 38038340012001100095
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Santa Cruz de Tenerife
Sección: 1
Nº de Recurso: 974/2000
Nº de Resolución: 352/2001
Procedimiento: SOCIAL
Ponente: VICENTE ALVAREZ PEDREIRA
Tipo de Resolución: Sentencia

RECURSO NUMERO: 974/2000

MAGISTRADOS:

ILTMO.SR.DON.JOSÉ MARÍA DEL CAMPO Y CULLEN. Presidente

ILTMO.SR.DON.JOSÉ MANUEL CELADA ALONSO.

ILTMO. SR. DON VICENTE ALVAREZ PEDREIRA.

En Santa Cruz de Tenerife, a, catorce de mayo de dos mil uno.

La Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife.

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm. 974/2000, interpuesto por Dña. Claudia , frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. CUATRO en los Autos R.- 228/99 en reclamación de RECONOCIMIENTO DERECHO/INVALIDEZ, ha sido Ponente el ILTMO. SR. DON VICENTE ALVAREZ PEDREIRA.

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO.- Que según consta en Autos, se presentó demanda por Dña. Claudia , en reclamación de PRESTACIONES siendo demandado el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y celebrado juicio y dictada Sentencia, el día 2 de octubre de 2000, por el Juzgado de referencia.

SEGUNDO.- Que en la citada Sentencia y como hechos probados, se declaran los siguientes: 1.- Claudia nacida el 3 de marzo de 1947, y número de afiliación a la Seguridad Social, NUM000 , y de profesión cocinera permaneció de baja desde el 8 del 11 del 96 al 8 de julio de 1998. La base reguladora es de 74665. -2.- El 8 del 7 de 1 98 la Unidad de valoración de incapacidades emitió el siguiente dictamen, juicio diagnóstico solicitante obesa que parece estar afectada de fascitis plantar, existe el consabido diagnóstico de **fibromialgia** que se emplea cuando no se sabe que decir, alteraciones espondilóticas propias de la edad de la interesada. Menoscabo funcional y orgánico, de los datos obtenidos no se justifica la existencia de incapacidad permanente Juicio terapéutico, tratamiento ortopédico Juicio pronóstico no incapacidad o, Circunstancias socio laborales, pase a cei. -3.- La comisión de evaluación propuso la no calificación del trabajador referido como inválido permanente. La dirección provincial denegó la solicitud el 6 del 10 del 98, por no ser las lesiones constitutivas de incapacidad permanente, y por no hallarse al corriente en el pago de las cuotas exigibles en la fecha en que se entiende causada la prestación, figurando al descubierto diferencias del mes de febrero de 1990. -4.- La actora presentó reclamación previa. La reclamación fué desestimada. -5.- La actora padecía de talalgia bilateral por espolón calcáneo, fascitis plantar, siendo intervenida del pie izquierdo en diciembre de 1996, con evolución torpida, y continúa con

molestias, presentando en la actualidad gonalgia bilateral crónica de ritmo artrósico y poliartralgia, se encontraba en tratamiento en el servicio de reumatología donde se le indicó que debía bajar peso, usar tacón de 3 o 4 cm., taloneras blandas de descarga, eventualmente infiltraciones locales y seguir determinadas normas higiénico posturales, (dormir en cama dura, sentarse en asientos altos con respaldo alto, en trabajos que exigen posición prolongada de pie realizarlos sobre tablero mas alto posible para no inclinar la espalda, evitar cargar pesos, o deportes o actividades que tengan que realizar movimientos de cintura y cuello, evitar bajar y subir escaleras, mantener los pies estirados en la cama no permanecer sentada sin apoyo de toda la espalda.

TERCERO.- Que por el Juzgado de lo Social núm. CUATRO se dictó Sentencia, cuyo Fallo literal dice: Que desestimando la demanda interpuesta por Claudia contra el INSS, debo absolver al INSS de la misma.

CUARTO.- Que contra dicha Sentencia, se interpuso Recurso de Suplicación por la parte Demandante, siendo impugnado de contrario. Recibidos los Autos por esta Sala, se formó el oportuno rollo y pase al Ponente, fijándose el día 8 marzo 2001 para los actos de votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la Sentencia de Instancia, que desestima la demanda interpuesta por la actora solicitando se le reconociera una invalidez permanente total y absuelve a los organismos y empresas demandadas, se alza en Suplicación la parte demandante, que, sin ajustarse a lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Procesal Laboral que obliga a establecer el objeto de este Recurso, se limita a relacionar unos hechos y unos fundamentos jurídicos.

SEGUNDO.- La actora, sin ampararse en el apartado b) del artículo 191 de la Ley Procesal Laboral, se limita a formular una relación de hechos que, a su juicio, es la que corresponde, sin que ello pueda prosperar, ya que, contrariamente a lo dispuesto, no se cita documento alguno que apoye una modificación, ni se concreta que es lo que se pretende revisar, ni se ofrece un texto alternativo.

La revisión que se postula, en primer término, insistimos, no reúne los requisitos para su toma en consideración, pues no tiene apoyo en prueba documental precisa, además de que sólo se relaciona la documental examinada por el Juzgador de Instancia para sus conclusiones, y no se ofrece texto alternativo, por lo que la pretensión no puede prosperar, por la imposibilidad procesal de ser combatido en suplicación el relato de hechos probados, cuando han sido obtenidos por el Magistrado <<a quo>> de los mismos documentos en que la parte pretende amparar el recurso y, además, cuando, como en este caso, nada se concreta, ni se ofrece documental, ni texto alternativo.

La revisión se fundamenta exclusivamente en hacer una interpretación distinta de la del Juzgador de Instancia de los hechos que se relacionan.

No basta con que la revisión se base en un documento o pericia, sino que es necesario señalar específicamente el documento objeto de la pretendida revisión, que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que estima que se desprende la equivocación genérica, ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso.

El error ha de evidenciarse simplemente del documento, sin necesidad de que el recurrente realice conjeturas, hipótesis o razonamientos, por ello mismo se impide la inclusión de afirmaciones, valoraciones o juicios críticos sobre la prueba practicada.

Esto significa que el error ha de ser evidente, evidencia que ha de destacarse por sí misma, superando la valoración conjunta de las pruebas practicadas que haya podido realizar el juzgador <<a quo>>, y no pueden ser combatidos los hechos probados si éstos han sido obtenidos por el Juez del mismo documento la parte relaciona para interpretar de forma distinta los hechos.

Es doctrina constante de los Tribunales laborales la de que sólo de excepcional manera han de hacer uso los Tribunales superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el juzgador de Instancia, facultad que le está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como 'revisorios', ofrezcan tan clara fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten claro error de hecho sufrido por la Juzgadora en la apreciación de la prueba.

En su consecuencia, el error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de

que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios, pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo de la juzgadora de Instancia - fruto de su personal convicción extraída de las pruebas practicadas, conforme a la facultad que le otorga el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral - por el de la parte, lógicamente parcial e interesado, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar que tanto el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578, 2635 y ApNDL 8375) como el artículo 117.3 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875) otorgan en exclusiva a los Jueces y Tribunales; para el éxito de la pretensión revisoria, los errores de hecho denunciados ha de tener trascendencia suficiente para variar el signo del fallo, ya que, de otro modo - y salvo supuestos excepcionales que aconsejen su inclusión - razones de economía procesal impiden que sean acogidos en revisión los errores fácticos denunciados que carezcan de dicha trascendencia, máxime cuando no se concreta, pues su acogida a nada práctico conduciría.

Son estos principios lo que conducen a la desestimación de este motivo del recurso debido a que no se invoca documental para la revisión, y, porque, dicha prueba, citada, pero no relacionada, ya fué valorada convenientemente por el Magistrado <<a quo>> y ésta debe prevalecer, frente a la interpretación más subjetiva e interesada de los recurrentes que no han logrado desvirtuar la de la Juzgadora de Instancia.

TERCERO.- Sin correcto amparo en el apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues no se alega concreta infracción de norma sustantiva o de la Jurisprudencia, en la Sentencia, pues se limita a indicar, en el Fundamento Jurídico III, que al fondo del asunto le es de aplicación, sin más, el artículo 134.1, último párrafo, del Real Decreto Legislativo, 1/1994, de 20 de Junio, que regula - con carácter general - la Invalidez Permanente, se formulan alegaciones en el Recurso.

Según la Doctrina el art. 191 de la LPL, señala como posible objeto del recurso de suplicación en su apartado c): "Examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

Por esta vía se trata de conseguir la revisión de la Sentencia basada en una presunta mala aplicación e interpretación de la normativa jurídica y/o de la jurisprudencia utilizada para resolver la cuestión litigiosa de fondo (error iu iudicando).

La exégesis del precepto - que se corresponde con el motivo de casación previsto en el apartado c) del art. 205 LPL - puesto en relación con lo dispuesto en el art. 194.2 de la LPL, permite extraer las siguientes conclusiones:

a) No teniendo cabida en el orden social la figura de la apelación, ello impide a la Sala el control de legalidad de la Sentencia de Instancia en relación con preceptos sustantivos cuya infracción no hay sido denunciada por la parte recurrente, aunque pudiera haber incurrido el juez en otras infracciones normativas las cuales, por patentes que sean, si no han sido acusadas no podrán ser revisadas por el Tribunal ad quem, salvo que por su propia índole trasciendan de modo evidente y directo al orden público.

Insiste el art. 194.2 de la LPL en la necesidad de que el recurrente cite concretamente en el escrito de interposición del recurso las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas; si la norma contiene varios apartados, debe concretarse cuál de ellos se reputa infringido; lo contrario supondría atribuir a la Sala la construcción ex officio del recurso, responsabilidad que incumbe a la parte.

La Sentencia de 23 de Octubre de 2000 del T.S.J. de Galicia, nos dice:

"Resulta patente, según lo que se ha dejado indicado, que el recurso interpuesto carece de motivo formulado al amparo del art. 191 C) LPL y que tenga por objeto explicitado <<examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia>>.

Semejante omisión del recurso implica una inobservancia frontal de lo normado en los arts. 191 c) y 194.2 de la Ley Adjetiva Laboral puesto que la suplicación es, como ha declarado esta Sala en reiteradas Sentencias - sirvan de ejemplo las de 8 y 24 de enero de 1992, 29 de mayo de 1995 y 31 de marzo (AS 1997. 898) y 18 de septiembre de 1997 (AS 1997, 3052) - un recurso de carácter extraordinario, aunque revestido de un menor rigor formalista que el de casación en el que la actividad de la Sala queda limitada a la pauta marcada por la recurrente, no pudiendo el Tribunal examinar la existencia de vulneraciones legales o infracciones jurisprudenciales, aún manifiestas, no invocadas por el que recurre, salvo que por su propia entidad trascendieran de manera directa e inequívoca al orden público procesal - lo que no acontece en el caso litigioso."

CUARTO.- En el recurso interpuesto no se formula ningún motivo al amparo del art. 191 C) LPL, como ya quedó suficientemente explicitado en el precedente fundamento jurídico, al igual que sus consecuencias.

Así, la confirmación de la Sentencia de Instancia ya se impone, pues los motivos de recurso formulados carecen de aptitud para tener por impugnados en derecho, de forma admisible, en suplicación su contenido y decisión.

En todo caso, tampoco las marginales e insuficientes argumentaciones que aparecen en las alegaciones constituyen o encierran una censura jurídica viable a la aplicación normativa que en la Sentencia de Instancia se contiene; tomándolos en consideración el Tribunal, a pesar de lo que se ha dejado hasta ahora expuesto, en aras de agotar el examen del recurso desde su íntegro contenido.

El mantenimiento de los hechos probados, hace que, a su vez, deba centrarse los términos del debate en la interpretación a la vista de las secuelas, de si procede reconocer una invalidez Permanente - como pide la recurrente - o, por el contrario, y como señala la Sentencia de Instancia, tal declaración no procede.

Partiendo, en todo caso, de los inalterados hechos probados, las secuelas que le han quedado a la actora - y que se relacionan - no acreditan gravedad, ni que éstos le impidan el desempeño habitual de puesto de cocinera.

Las secuelas que presenta la actora son las descritas en el Hecho Probado Quinto de la resolución recurrida, a través de los diversos partes médicos aportados por las partes, y, en especial, de la Pericial practicada.

Puestas en conexión con las tareas que debe realizar la actora en el ejercicio de su profesión habitual de cocinera se desprende que no se halla incapacitada para realizar todas, ni las fundamentales, tareas de este puesto de trabajo.

La incapacidad permanente total, viene definida en nuestras leyes vigentes en la fecha de la situación invalidante discutida en el litigio - concretamente en el número 4 del art. 137 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por R. Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en relación con el contenido de los números 1 y 3 de su art. 134, como la situación del trabajador que, por enfermedad o accidente, presenta unas reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que le imposibilita para la realización de todas o las fundamentales tareas de dicha Profesión.

Repárese en que, según la actual normativa: a) lo que realmente se valora es la trascendencia que tienen las limitaciones con que definitivamente queda el trabajador en relación a su rendimiento profesional en el oficio que desempeña habitualmente, en tanto que carece de toda importancia, a estos efectos, lo que vaya a repercutir en otros aspectos de su vida ajenos al trabajo; b) que esa merma de capacidad laboral toma como módulo de referencia la profesión habitual, por, lo que en nada se valora la influencia que pueda tener para el desarrollo de otras profesiones; c) que nuestro legislador señala la profesión habitual y no el concreto puesto de trabajo en que aquélla se viene ejerciendo, en inequívoca señal de que la valoración no ha de hacerse en función de las características de éste, sino en razón a las más generales de la profesión, y que no se trata de compensarle por el concreto perjuicio que pueda tener de inmediato en la empresa en la trabaje, sino por los que - con visión más a largo plazo - pueda ocasionar en el curso de su vida laboral, medible a través de la profesión.

Este recurso no puede prosperar como consecuencia lógica de lo ya apuntado, pues es lo cierto que, para su éxito, requiere del acogimiento de las limitaciones, limitaciones que, como hemos dicho, no resultan de la prueba, ni siquiera se relacionan en el Recurso.

Tomando como punto de partida las lesiones recogidas en el inalterado hecho probado quinto de la Sentencia impugnada, las lesiones de la actora, no le impide realizar las funciones de su categoría profesional, por lo que no se le puede reconocer la invalidez pedida, pues, en consecuencia, no habiéndose probado disminución u rendimiento y no probándose que se produzca penosidad o peligrosidad, debe entenderse que no nos encontramos ante los supuestos a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, lo que lleva a desestimar el motivo y, por tanto, el recurso, confirmando la Sentencia impugnada.

No resulta que los padecimientos de la actora en los pies, ni sus poliartralgias, sean de tal gravedad que le impidan la realización de las actividades propias de su profesión de cocinera, limitándose a realizar una serie genérica sobre normas higiénico posturales, sin que conste referencia alguna a la intensidad del dolor que puede presentar la actora.

Por otro lado, y como acertadamente señala la Sentencia de Instancia, la profesión de cocinera es preferentemente manual y se puede realizar tanto de pie como sentada, y alternando una y otra posición, sin perjuicio de que en ninguno de los informes señalados se indica que la actora no pueda estar de pie durante mucho tiempo, (así nada se señala en las normas higiénico posturales) por lo tanto no constando acreditada la gravedad de los padecimientos de la actora, ni que estos le impidan el desempeño de su profesión habitual la demanda debe ser desestimada y el recurso rechazado.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación, interpuesto por Dña. Claudia contra la sentencia del Juzgado de lo Social de referencia de fecha 2 de octubre de 2000, en virtud de demanda interpuesta por la actora contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en reclamación de DERECHO (INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL PARA EL TRABAJO HABITUAL) y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la Sentencia de Instancia.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social núm. CUATRO, de ésta Capital, con testimonio de la presente una vez notificada y firme a las partes y con advertencia a las mismas de contra la presente Resolución podrá interponer Recurso de Casación por Unificación de Doctrina, en base a lo dispuesto en los arts. 215 y ss. de la Ley de Procedimiento Laboral en el plazo de 10 días hábiles, previos depósitos que marca los arts. 226 y 227 de dicho cuerpo legal. Remítase testimonio a la Fiscalía de la Audiencia Provincial y líbrese otro testimonio para su unión al rollo de su razón, incorporándose original al Libro de Sentencia.

Así por esta nuestra Sentencia, que es firme, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada la anterior Sentencia, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, que la suscribe en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Se envía testimonio a la Audiencia Provincial, en unión del correspondiente oficio de remisión. Doy fé.